

Cifras de Carabineros revelan que 24 ataques se han registrado en La Araucanía y 13 en Biobío

Macrozona sur: En la última década, 37 escuelas han quedado inhabilitadas

Los establecimientos dañados se distribuyen en 13 comunas de cuatro provincias. Siete casos fueron adjudicados por Resistencia Mapuche Malleco.

VÍCTOR FUENTES BESOAIN

Un informe de Carabineros revela que, en el lapso de una década, 37 establecimientos educacionales fueron blancos de atentados incendiarios en la macrozona sur, los que afectaron a recintos de 13 comunas de las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y de Concepción y Arauco, en Biobío.

Consultadas las secretarías regionales ministeriales de Educación de ambas regiones, reconocieron que no contaban con información de todo el período analizado.

Desde La Araucanía plantean que solo poseen registros de casos ocurridos en el actual gobierno; es decir, desde el 11 de marzo de 2022.

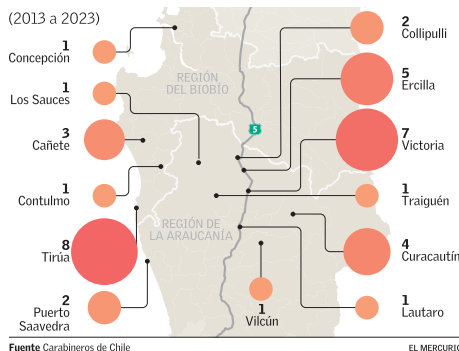
Respecto de estos señalan que, junto a nueve recintos siniestrados por terceros, otros siete fueron alcanzados por incendios forestales. Si bien ninguno ha terminado su reconstrucción, las obras deberían completarse entre fines de este año y 2027. Agregan que en uno de los casos el sostenedor trasladó a la única alumna a otro de sus establecimientos.

En tanto, desde Biobío se entrega información correspondiente al período 2020. El seremi Carlos Benedetti dice que ese año, en la provincia de Arauco, seis escuelas fueron afectadas por este tipo de acciones. “En cinco de estos casos se concretó una solución modular de infraestructura transitoria de emergencia”, afirma.

También agrega que “en el caso de la escuela Cerro Negro de Tirúa se optó por reubicar a los estudiantes”.

La Junta Nacional de Jardines

Distribución de los recintos educacionales afectados por atentados en los últimos 10 años



ARAUCA.— La escuela Ana Molina suma tres atentados en Tirúa. Este año logró el mejor puntaje comunal en Lenguaje de la prueba Simce.

Infantiles (Junji) especifica que, de los tres recintos que han sido violentados en Arauco, el de Pichi Ayén (Tirúa) atiende “en modalidad de contingencia en una sede social colindante a la escuela Chacuvivi”, y que su reposición incluye una inversión de más de \$610 millones.

Asimismo, el Centro Educativo Cultural de Infancia, de caleta Yani, cumple su programa en jornada parcial en la escuela básica Alto Yani. Se evalúa el traslado de contenedores para jardines modulares.

De igual manera, el Programa de Mejoramiento de la Infancia “Semillitas”, de Cañete, desarrolla su labor en dependencias de la escuela de Huape.

Para el presidente del Senado e integrante de la comisión de Educación, José García Ruminot (RN), el retraso o ausencia de obras para reponer recintos educacionales da cuenta de la falta de una política para enfrentar este tipo de emergencias y aboga para que se le incluya en el ítem de reparación a víctimas del Ministerio del Interior.

“En general, no hay una pérdida del acceso a la educación producto de estos hechos. Porque los alumnos han sido reubicados o los colegios se han arreglado como pueden y no dejan de funcionar”, comenta el legislador.

A modo de ejemplo, sostuvo que en el caso de la escuela Las Cardas, en Victoria, que ha sufrido cuatro atentados, “han ido haciendo arreglos de a poco y ahora van a recibir recursos para instalar aulas modulares”. El senador agrega que un colegio

particular subvencionado “optó por funcionar tanto en una sede social como en las instalaciones de una iglesia”.

“Dimensión no explorada”

Cruzando las informaciones de Carabineros con sus propios registros en el seguimiento en temas de seguridad, el excoordinador de la macrozona sur Pablo Urquizar advierte que “el impacto en el derecho a la educación es una dimensión no explorada en

“Los colegios se las arreglan como pueden y no dejan de funcionar. Espero que se llegue a un acuerdo con el Ministerio del Interior y se puedan reparar con recursos del programa de víctimas”.

JOSÉ GARCÍA RUMINOT (RN)
PRESIDENTE DEL SENADO

los atentados incendiarios”.

Al respecto, expone que en el caso de Tirúa, que registra ocho atentados (ver infografía), la mayor afectación la sufren alumnos mapuches, ya que, “de la población comunal, el 70,6% corresponde a integrantes de ese pueblo”. Enfatiza que estas acciones afectan el ámbito de la no discriminación, dado que son escuelas vulnerables.

Urquizar hace notar que del total de 37 ataques, siete los reivindicó Resistencia Mapuche Malleco, “con lo que es el único grupo, de los diez que actúan en la zona, que se declara enemigo expreso de las escuelas”.